

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por ORLANDO AMADO MUÑETÓN BARRERA contra la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA) (Radicado **05001-31-05-003-2018-00889-01**).

ANTECEDENTES

El demandante inició este juicio para obtener de la Gobernación de Antioquia la pensión sanción regulada en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 y el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, con el correlativo reconocimiento de los intereses moratorios, la indexación y las costas procesales.

Tales aspiraciones las fundamentó en que nació el 20 de marzo de 1945, contando en la actualidad con 72 años. Estuvo vinculado con la Gobernación de Antioquia - Secretaría de Obras Públicas desde el 26 de septiembre de 1977 y hasta el 19 de mayo de 1989 en el cargo de Operador de Primera en el frente de Zaragoza - Antioquia, de acuerdo al bono pensional y la Resolución N° 0169 del 15 de mayo de 1989. Completó 11 años y 239 días en la entidad en su calidad de trabajador oficial, siéndole aplicable la Ley 171 de 1961 que fue modificada por el artículo 133 de la Ley 100 para efectos de optar por la pensión sanción o la indemnización

sustitutiva. El 05 de septiembre de 2016 radicó solicitud de reconocimiento de pensión de jubilación en la modalidad de pensión sanción, la que fue negada por Resolución N° 2016060079161 del 29 de septiembre de 2016 por darse el retiro de cuenta de su renuncia y que la indemnización sustitutiva no tenía cabida porque no estaba vigente la Ley 100 de 1993. El 13 de octubre de 2016 interpuso los recursos de ley, recibiendo la confirmación de la decisión por Resoluciones N° 2016060098262 del 07 de diciembre de 2016 y N° 2017060079318 del 04 de mayo de 2017.

La GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA se pronunció sobre el libelo aceptando la mayoría de los hechos, pero con oposición a lo pedido enfatizando en que el retiro del trabajador se dio por su renuncia voluntaria, lo que da cuenta la Resolución N° 169 del 15 de mayo de 1989, por lo que no tiene aplicación el artículo 133 de la Ley 100 de 1993. Propuso como medios exceptivos de fondo los de presunción de legalidad de los actos demandados, terminación del contrato debidamente justificada y no aplicación de la indemnización moratoria por buena fe asumida por el Departamento de Antioquia.

En audiencia celebrada el 03 de mayo de 2022, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a la demandada de las pretensiones de la demanda con imposición de costas a cargo del demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor del demandante al resultar la sentencia totalmente desfavorable a sus intereses.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Es necesario iniciar precisando que, como hechos no debatidos por las partes en esta instancia, se encuentran la prestación del servicio del actor a la Gobernación de Antioquia entre el 26 de septiembre de 1977 y el 19 de mayo de 1989 en calidad

de trabajador oficial, ejecutando la labor de Operador de primera en la Secretaría de Obras Públicas (Págs. 27-35 Archivo 03 y Págs. 26-34 Archivo 07).

En ese contexto, atendiendo el grado de consulta, el problema jurídico a resolver por la Sala se circunscribe a dilucidar la procedencia de imponer a la demandada la pensión sanción pretendida con sus prerrogativas consecuenciales.

Descendiendo a la finalidad esencial de este proceso, resulta pertinente memorar que la normatividad que rige la prestación pedida es la vigente al momento de la causación del derecho, y tratándose de una pensión sanción, debe acudirse a la fecha del finiquito del vínculo que unió a las partes y que ocurrió el 19 de mayo de 1989, para definir la disposición a aplicar, siendo viable el estudio del derecho conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, que consagró tanto para trabajadores oficiales como particulares la pensión proporcional de jubilación, en las modalidades de pensión sanción para cuando estos fueren despedidos sin justa causa con más de 10 años de servicio y menos de 20, continuos o discontinuos, constituyéndose entonces en requisitos para su otorgamiento los siguientes: i) la terminación del contrato de trabajo sin justa causa con cumplimiento de la edad de 60 años, y ii) el tiempo de servicios superior a diez o quince años; precisando que la falta de afiliación al sistema general de pensiones solo surgió con la entrada en vigencia del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, que estipuló que a la pensión sanción tendrían derecho los no afiliados al sistema general de pensiones por omisión del empleador.

De las probanzas documentales con las que se cuenta, es fácil desprender que el segundo de los requisitos está plenamente satisfecho, en tanto es indiscutido el tiempo servido a la enjuiciada y que equivale a 11 años, 7 meses y 23 días, pero es que basta acudir a la documental que se anexó con el escrito de contestación para evidenciar que el fin de esa indiscutida vinculación surgió por renuncia presentada por el trabajador, la que fue aceptada por medio de la Resolución N° 0169 del 15 de mayo de 1989, comunicada al colaborador por misiva del 16 de mayo de igual calenda con efectos a partir del 20 de mayo de 1989 (Págs. 24-25 Archivo 07), probanza suficiente para encontrar inadvertidos los requerimientos que por ley debió alcanzar el actor a fin de hacerse acreedor de la pensión sanción buscada, y que desde sede administrativa fue negada acorde a la legalidad, por lucir patente que la relación no feneció por una causa revestida de injusticia proveniente de la parte empleadora que corresponde a uno de los esenciales

presupuestos para la causación de esta prestación, sino por la determinación libre y voluntaria del empleado, sin que en el escenario judicial se surtiera un cuestionamiento sobre la intervención de vicios en la decisión del señor Muñetón, prestación que debe sujetarse a las exigencias del legislador, sin que la condición económica del solicitante que se relata en el hecho cuarto de la demanda merezca algún análisis, y tampoco existe un criterio auxiliar del que pudiera echarse mano para atender condiciones especiales de cada interesado, ni es posible acudir a esas subjetivas características para imponer a una entidad patronal esa obligación pensional.

Lo anterior basta para dar razón a la decisión absolutoria que se revisa en consulta, debiendo en ese orden confirmar la providencia.

Sin costas en esta instancia, dada la manera como se conoce del asunto.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia consultada de fecha y procedencia conocidas. Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
SIN FIRMA POR PERMISO AUTORIZADO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500320180088901
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	ORLANDO AMADO MUÑETON BARRERA
Demandado:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	4/05/2023
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 5/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario